



QUEJOSO Y RECURRENTE:

******* , EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO TÉCNICO DE
COMBATE A LA TORTURA,
TRATOS CRUELES E INHUMANOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO FEDERAL DE
DEFENSORÍA PÚBLICA.**

Relacionado con Q.P. ***** (ya resuelta).

SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO PONENTE:
DANIEL GUZMÁN AGUADO.

SECRETARIA DE ESTUDIO: MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ DUARDO.

Ciudad de México. Acuerdo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la **sesión ordinaria virtual de veintidós de octubre de dos mil veinte.**

V I S T O S, para resolver, el recurso de queja
***** , interpuesto por ***** ***** *****

***** , en su carácter de Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, contra el auto de seis de agosto de dos mil veinte, pronunciado por la Juez ***** de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo ***** y su acumulado ***** y,

ito pres
en el S

Técnica
humana
al de

e, el asu
n Mater
do Pro

e siete c
Secreta
quade

RAND

a. Este

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver el recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 84/2001 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos el primero a las denominaciones y fechas de inicio de funcionamiento de entre otros órganos jurisdiccionales, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; el segundo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además de que se interpone contra un acuerdo dictado por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México con jurisdicción en este circuito.

SEGUNDO. El recurso de queja fue interpuesto dentro del plazo de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo impugnado se notificó electrónicamente al quejoso el diez de agosto de dos mil veinte, por lo que el plazo de cinco días hábiles, transcurrió del **doce al dieciocho de agosto de dos mil veinte**, sin contar el quince y dieciséis de ese mes y año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; mientras que el recurso se interpuso el **catorce de agosto**, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), según evidencia criptográfica, es inconcuso que su interposición se realizó dentro del plazo

legal establecido.

TERCERO: El acuerdo impugnado en queja, en lo conducente, es del tenor:

“...Ciudad de México, seis de agosto de dos mil veinte.

*Téngase por recibido el oficio de cuenta registrado con el folio **2029**, proveniente del **Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito**, a través del cual remite vía electrónica testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de catorce de mayo de dos mil veinte dentro del recurso de queja ***** interpuesto por **** *****
***** , agente del Ministerio Público de la Federación en auxilio de la Mesa 11 de la Coordinación "A" perteneciente a la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República, en cuyo punto resolutivo señala:*

“ÚNICO. Se declara **infundado** el recurso de queja.”

Acúcese el recibo de estilo correspondiente.

Realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

*Se tiene a la superioridad informando que la copia certificada del juicio de amparo ***** y su acumulado ***** , la remitirá una vez que se regularicen las labores jurisdiccionales, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.*

*En otro orden, glócese el oficio de cuenta registrado con el folio 2346, signado electrónicamente por *****
***** , Titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el cual pretende*

la parte quejosa, en razón de que se tratan actos diversos que no forman parte de la litis y no se actualiza ninguna de las hipótesis para la procedencia de la ampliación de demanda.

En principio, es factible establecer que la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica que confiere a la parte quejosa el derecho para incorporar a la litis constitucional, diversas autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación; empero, ese derecho debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, como son:

a) Que no se haya cerrado o integrado la litis (no se hayan rendido los informes justificados).

b) Que del informe justificado aparezcan datos no conocidos por la parte accionante, que en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, a bien cuando dicha parte, por cualquier medio, tenga conocimiento de diversos actos de autoridad vinculados con los reclamados.

c) Que lo anterior tenga vinculación con el acto originalmente reclamado en el escrito inicial de demanda.

Ante lo anterior, puede suceder que en los informes justificados las autoridades responsables den a conocer a la parte solicitante del amparo, los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados, aludan la existencia de actos, diversos a los reclamados (cuando exista vinculación); o mencionen la participación de autoridades diferentes, presupuesto que podría dar lugar a ampliar la demanda de amparo, ya que de otra manera el juzgador de amparo no podría examinar válidamente los nuevos actos,

juzgar a las autoridades que los emitieron, ni atender los argumentos que la quejosa enderece contra ellos.

Así, de lo antes indicado puede afirmarse que la formación del litigio en el amparo puede verse influida con motivo de la rendición de los informes justificados, cuando de su contenido pueda apreciarse el conocimiento de nuevos actos, o la participación de diversas autoridades que propicien la necesidad de ampliar la demanda de amparo inicial, a fin de hacerse cargo de las cuestiones introducidas; circunstancia que en el particular no acontece.

En la especie, es necesario precisar que en el presente controvertido, los actos reclamados se hacen consistir en:

- 1. La omisión de supervisar de manera diligente y efectiva que el agente del Ministerio Público de la Federación investigue los delitos con la debida diligencia en la indagatoria *****.**
- 2. La omisión de supervisar que el Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura investigue los delitos con la debida diligencia en la averiguación previa *****.**
- 3. Las omisiones en la coordinación y supervisión de la actuación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, en las que ha delegado su función investigadora.**
- 4. La dilación en la integración de la averiguación previa ***** y su consecuente determinación.**

*Una vez analizado el ocuro de cuenta signado electrónicamente por ***** ,*

Titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Cruels e Inhumanos del Instituto Federal de

Defensoría Pública, se concluye que los actos por los que pretende ampliar su demanda de amparo, no guardan relación con la litis planteada en el presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que los actos por los cuales, se pretende ampliar la demanda son independientes y no guardan vinculación directa con aquéllos destacados en la presente instancia.

*Lo anterior es así, dado que en la presente instancia constitucional, se analizan actos omisivos relacionados con la investigación y determinación de la averiguación previa ***** , mientras que en el ocuro de ampliación se señalan actos omisivos relacionados con la operación e inscripción en el Registro Nacional del Delito de Tortura –acto administrativo–; por la que, los actos materia de la ampliación son de naturaleza diversa, independientes y no guardan relación con la litis en este asunto, mismos que deben ser impugnados a través de un diverso juicio de amparo.*

Por lo tanto, al no existir relación o vinculación con los actos originalmente impugnados, requisito sine qua non para la procedencia de la ampliación que en este caso se intenta, lo conducente es no acordar de conformidad la pretensión del promovente.

Razones por las cuales no se estima procedente la ampliación de la demanda de amparo respecto de la autoridad y actos reclamados propuesto por el quejoso, toda vez que no guarda vinculación directa con los inicialmente reclamados.

Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/240, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, del

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIX, enero de 2004, visible a página 1339, que dice:

'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS.' **(Se transcribe tesis)**

Así como la jurisprudencia 15/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, visible a página 12, que establece:

'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.' **(Se transcribe tesis)**

Bajo esa tesitura, al no colmarse las hipótesis que permiten la ampliación de la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable y actos precisados; lo procedente es desechar la ampliación de demanda propuesta, por lo que quedan expeditos los derechos de la parte quejosa a fin de que los haga valer en la vía y forma que a sus intereses convenga.

Sin que se estime que la presente determinación irroque perjuicio a la parte quejosa, toda vez que todos aquellos actos que pudieran causarle perjuicio, podrán ser analizados en los juicios de amparo, con motivo de las demandas de derechos fundamentales que promueva en contra de cada una de las omisiones que le deparen perjuicio; lo anterior, en virtud de que no es dable incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos.

En otra consideración, del estado procesal que guarda el juicio de derechos fundamentales, se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable **agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 2 de la Coordinación 'B' de la Fiscalía en Investigación del Delito de Tortura**, licenciada *****

***** , pese a estar debidamente notificada; en consecuencia, requiérase nuevamente a la indicada representante social, para que dentro del plazo de **CUARENTA Y OCHO HORAS**, contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, remita su informe con justificación y copia certificada de todas y cada una de las constancias que acrediten que no han incurrido en la abstención que se le reclama.

Documentales que **deberán ser legibles, completas y en orden cronológico.**

Apercibida que en caso de incumplimiento se hará efectiva la medida de apremio establecida en proveído de siete de febrero de dos mil veinte y este Juzgado de Distrito acordará lo que en derecho corresponda.

Finalmente, vista la certificación de cuenta se advierte que no se pudo celebrar la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cuarenta minutos del dos de abril de dos mil veinte, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Ante tal circunstancia, tomando en consideración que se reactivaron los órganos jurisdiccionales, se señalan las **nueve horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veinte**, para su celebración.

Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables,

absolutamente clara; y por “indudable”, de lo que se tiene la certeza y plena convicción de que la causal se actualiza en el caso, sin que pudiera obtenerse convicción diversa a pesar de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento.

*En el presente caso, inicialmente se reclamó que el agente del Ministerio Público de la Federación no había llevado a cabo una investigación diligente, efectiva y en un plazo razonable, puesto que **a casi 10 años de la ocurrencia de los hechos** continúa la integración de una indagatoria, sin avances sustantivos. Asimismo, se señalaron como autoridades responsables al Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, la Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos y el Fiscal General de la República, conforme a sus facultades y obligaciones como superiores jerárquicos, por la omisión de supervisar adecuadamente a sus respectivos subordinados, propiciando que la dilación en la presente investigación persista.*

*Posteriormente, al solicitar información sobre el registro en el RENADET de las personas por las que he interpuesto denuncia, el titular de la FEIDT señaló mediante oficio *****

que no se ha instalado el RENADET y, en consecuencia, tampoco se ha registrado a ninguna persona víctima de tortura. Manifestó que:

[...] el Registro Nacional de Tortura (RENADET), en términos de la Ley General, es la herramienta de investigación y de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncie y se investigue los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes [...]. De acuerdo con lo señalado, el RENADET es el sistema tecnológico que compila la información proporcionada por diversas instancias y autoridades relacionadas con los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con el objeto de constituirse como herramienta de investigación y de información estadística. Por otro lado, de conformidad con el artículo 85 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Procuraduría (ahora Fiscalía General de la República), tiene la obligación de coordinar la operación y la administración del Registro Nacional, por lo que esta Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura se encuentra trabajando en los avances tecnológicos que se tienen derivado de

nuestros requerimientos solicitados para la constitución y modificación del Registro Nacional. En ese sentido, también se está en vinculación con demás instancias y autoridades para el compartimiento de sus respectivas bases de datos, como lo ordena la Ley General, y así contar con la consolidación del RENADET [...] Razón por la cual, aún no se ha hecho la inscripción de ninguna posible víctima en el Registro Nacional. Sin embargo, esta autoridad ministerial lleva a cabo los registros de casos de esta Fiscalía Especializada, en el que se concentran datos que, en su momento, alimentarán el RENDATED una vez esté en operación.

Aun cuando esta respuesta no fue emitida dentro del informe justificado de la autoridad responsable, en términos de la Ley de Amparo (artículo 111), resulta irrelevante que los datos proveídos por la responsable se hayan derivado de una solicitud del quejoso, ya que ésta no excluye la posibilidad de impugnar actos u omisiones que se hayan derivado de una acción de la parte quejosa.

Por su parte, la jurisprudencia de rubro 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE DESECHARLA ÚNICAMENTE CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA POR EL JUEZ DE DISTRITO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE.' tampoco restringe en ningún modo al modo de conocimiento de los actos de autoridad a la parte quejosa, estableciendo únicamente que conozca de éstos 'por cualquier medio de actos de autoridad vinculados con los reclamados'.

En ese contexto, es evidente que tuve conocimiento de las omisiones reclamadas en la ampliación de la demanda de amparo, como nuevo acto de autoridad, derivado de la respuesta de la FEIDT, y que las mismas guardan relación con la demanda inicial, por lo que la ampliación debe ser admitida.

Bajo los parámetros señalados, la ampliación de la demanda encuadra en los supuestos establecidos por la jurisprudencia y normativa aplicable, por lo que debió ser admitida, pues únicamente pudo ser desechada por una causa de procedencia manifiesta e indudable: circunstancia que no fue referida por el juzgador.

SEGUNDO. Relación entre las omisiones reclamadas inicialmente y aquéllas señaladas en la ampliación de la demanda.

La investigación de actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes implica toda una serie de diligencias que deben ser llevadas a cabo en un plazo razonable, particularmente bajo los estándares establecidos por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Si bien, no existe un catálogo limitado de las acciones que tendrán que realizarse por las autoridades competentes, si existen ciertas diligencias estatuidas como necesarias y obligatorias para esclarecer esta clase de delitos.

Al respecto, puede observarse que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece en su artículo 35 algunas de las primeras acciones que deberán ejecutarse frente a actos de tortura y/o malos tratos:

I. Iniciar de manera inmediata la investigación por el delito de tortura;

II. Comenzar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, incluyendo las declaraciones del denunciante o Víctima alegada del delito y los testigos:

III. Realizar el registro del hecho en el Registro Nacional [del Delito de Tortura]; [...]

Conforme a esta disposición, se advierte que una de las diligencias mínimas que engloba el deber de investigar y sancionar **es precisamente el registro del caso en el RENADET.**

De acuerdo a la misma Ley General (artículos 83 y 85), el RENADET es un sistema tecnológico de investigación y de información estadística que reúne datos como el lugar, fecha, circunstancias, técnicas, estado de la investigación, presuntos responsables y datos personales de la víctima o víctimas. Éste deberá ser creado, coordinado y administrado por la Fiscalía General de la República, así como operado por las Fiscalías Especiales de las entidades federativas y la Federación.

Sin embargo, según la respuesta del titular de la FEIDT, el RENADET no existe, a pesar de haber transcurrido el plazo para su establecimiento y funcionamiento. Esta situación resulta altamente preocupante y demuestra que a tres años

de la emisión de la Ley General (con sus correspondientes obligaciones), no se han desarrollado las herramientas ni tomado medidas eficaces para cumplimentar en su totalidad las implicaciones que rodean al combate de la tortura y los malos tratos mediante una investigación adecuada y diligente.

Como señala la propia Ley General en la materia, la obligación de investigar estas atrocidades incluye la creación de un Registro Nacional del Delito de Tortura, el cual constituye 'la herramienta de investigación y de información estadística' para casos de tortura o malos tratos, lo cual muestra prima facie que existe un vínculo ineludible con las omisiones reclamadas en la demanda inicial.

Es de alta importancia resaltar que el registro y documentación de un caso en el RENADET no es una potestad que puedan o no realizar las Fiscalías Especiales, como la FEIDT, sino una obligación que no admite excepción alguna para su cumplimiento y que debe ser vista como un paso más dentro del catálogo de acciones que las autoridades investigadoras especializadas deben ejecutar a la hora de investigar adecuada y diligentemente.

Se explica: si se tiene que un caso de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no devino en el inicio inmediato de una indagatoria, puede concluirse que ésta no califica con los criterios de una investigación adecuada y diligente. En el mismo sentido, si un caso de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no es registrado en el RENADET, tampoco podrá determinarse que se está frente a una investigación adecuada y diligente.

Así, se demuestra que tanto el inicio inmediato de la investigación como el registro de los hechos del caso en el RENADET forman parte de las diligencias que deberán practicarse dentro una indagatoria conforme a los estándares nacionales e internacionales, esto es, diligente, adecuada y ejecutada en un plazo razonable. Por ello, si no se lleva a cabo –en conjunto con otras diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades–, el registro de las víctimas y las circunstancias o datos relevantes sobre su caso, se estará ante un cumplimiento

La necesidad de establecer el RENADET, así como documentar los hechos de tortura o malos tratos conocidos por las autoridades especializadas, redundan en la obtención de beneficios sustanciales en favor del desarrollo de investigaciones adecuadas, diligentes y en un plazo razonable orientadas al esclarecimiento de la verdad y la determinación de responsabilidades; así como la generación de estrategias que coadyuven a la prevención, no repetición y transparencia pública de estas graves violaciones a derechos humanos en el país.

En ese sentido, la documentación de los casos de tortura y malos tratos en el país no sólo constituye una diligencia obligatoria para la investigación adecuada y diligente, sino también una medida que contribuye desde distintas aristas al combate de estas atrocidades (prevención, repetición, reparación) y a su vez, permite garantizar de forma holística los derechos de las víctimas, particularmente en materia de acceso a la justicia.

Quinto, La Procuraduría General de la República contará con un plazo de ciento ochenta días siguientes a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, para expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes y contar con la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura. Dentro de los noventa días posteriores al cumplimiento del plazo señalado en el párrafo anterior, las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros correspondientes.

A pesar del claro vencimiento del plazo fijado, el titular de la FEIDT señala que 'se encuentra[n] trabajando en los avances tecnológicos que se tienen derivado de nuestros requerimientos solicitados para la constitución y modificación del Registro Nacional'. Esto implica que a dos años y medio de la vigencia del deber de crear el RENADET, las autoridades responsables continúan 'buscando la infraestructura tecnológica' que se requiere.

Este retraso injustificado en la generación del RENADET repercute directamente en cada uno de los casos donde se denuncian actos de tortura o malos tratos, y constituye un ejemplo más de cómo las autoridades responsables no investigan de forma seria, exhaustiva, diligente y efectiva los actos de tortura o malos tratos, o en su caso, vigilan su cumplimiento.

El nulo compromiso y falta de voluntad de parte de las autoridades responsables en la realización y supervisión de tareas mínimas para el esclarecimiento de hechos constitutivos de tortura o malos tratos, entre ellas la instalación del RENADET y el registro de las víctimas en el mismo, afecta el desarrollo óptimo, idóneo y diligente de la investigación, por lo que se suma a las omisiones reclamadas en la demanda inicial, demostrando la estrecha vinculación con aquéllas señaladas en la ampliación...".

QUINTO. En síntesis los agravios son:

1. Inicialmente se reclamó que el agente del Ministerio Público de la Federación, no había llevado una investigación diligente, efectiva y en un plazo razonable, señalándose a las autoridades responsables Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, la Fiscal Especializada en Materia de

Derechos Humanos y el Fiscal General de la República, la omisión de supervisar a sus subordinados.

Posteriormente, se informó que las personas por las que se interpuso la denuncia, no han sido inscritas en el Registro Nacional de Tortura (RENADET), como lo prevé el artículo 85 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, y cuya obligación corresponde a la ahora Fiscalía General de la República.

Si bien, esa información no se mencionó en los informes justificados, sí mediante oficio *****
**** del titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la referida Fiscalía General de la República, se allegó a solicitud del propio quejoso.

Por lo cual, tuvo conocimiento de las omisiones que pretende ampliar.

2. Conforme al invocado numeral 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradables, se advierte que la investigación sobre los hechos de tortura y realizar el registro del hecho en el Registro Nacional de Tortura.

Lo cual conlleva a estimar que ambas acciones, forman parte de las diligencias que deberán practicarse dentro de la indagatoria, se lleva en conjunto con otras actuaciones para esclarecer los hechos.

enero de dos mil veinte, por unanimidad (con el voto concurrente de la magistrada Emma Meza Fonseca), declarar parcialmente fundada la misma, por lo que se determinó, se requiriera al solicitante del amparo para que precisara los actos reclamados, a qué autoridades en específico los atribuyó y aclarara la personalidad con que se ostenta.

- En cumplimiento a la ejecutoria, la juez constitucional en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinte, previno a la parte quejosa a efecto de que: a) acreditara con documento idóneo la personalidad con que se ostentó en el juicio de derechos; b) precisara cuáles son los actos que de manera destacada deseaba combatir en la instancia constitucional y a qué autoridades de manera específica se los atribuía; c) aclarara si la demanda que promovió era también en representación de *****; d) hecho lo anterior, en vía de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, debería narrar de manera clara, concisa y sucinta todos y cada uno de los hechos o abstenciones que constituían los antecedentes del acto que pretendía combatir, de manera individual y no genérica.

- El siete de febrero de dos mil veinte, únicamente se admitió la demanda presentada, respecto del acto:

* ***“La dilación en la integración de la averiguación previa ***** y su consecuente determinación”.***

Atribuido a la autoridad Agente del Ministerio Público de



- En ese mismo proveído (siete de febrero), respecto de los demás actos reclamados por la parte quejosa, la Juez de Distrito estimó no era competente, por lo cual la declinó a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, en consecuencia, ordenó la separación de autos.

- Por auto de diez de febrero de dos mil veinte, la titular del Juzgado ***** de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, no aceptó la competencia propuesta.

- Mediante acuerdo de trece de febrero del mismo año, la Juez ***** de Distrito en Materia Penal no insistió en declinar la referida competencia, por ende, admitió la demanda respecto de los actos:

*** “La omisión de supervisar de manera diligente y efectiva que el agente del Ministerio Público de la Federación investigue los delitos con la debida diligencia en la indagatoria *****.”**

Acto atribuido al Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (***** ***)

*** “La omisión de supervisar que el Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito investigue**

los delitos con la debida diligencia en la averiguación previa ***.”**

Que se reclama a la Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (**** ***** *****).
*****).

*** “Las omisiones en la coordinación y supervisión de la actuación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, en las que ha delegado su función investigadora.”**

*** “La dilación en la integración de la averiguación previa ***** y su consecuente determinación.”**

Actos que se atribuye al Titular de la Fiscalía General de la República (***** ***** *****).

En consecuencia, ordenó la acumulación del juico de derechos fundamentales ***** (a que se refiere la admisión de los actos reclamados citados en el proveído de trece de febrero de dos mil veinte), al diverso *****
**** (relativo a la admisión del acto reclamado a que se refiere el acuerdo de seis de enero de dos mil veinte).

Se solicitó los informes justificados correspondientes.

- El agente del Ministerio Público dela Federación, en auxilio de la Mesa 01 de la Coordinación A, de la Fiscalía

Especial en Investigación del Delito de Tortura, interpuso recurso de queja, en contra del auto trece de febrero (admisión de los actos reclamados mencionados en último término).

- Por razón de precedente, el medio de impugnación fue remitido a este Órgano Colegiado; se registró bajo el número **** *******, para en sesión de catorce de mayo de dos mil veinte (sesión ordinaria virtual), declarar por unanimidad infundado el recurso de queja.

- Mediante escrito vía electrónica, el Titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (quejoso), pretendió ampliar su demanda de derechos, en los siguientes términos (conducente):

“III. OMISIONES RECLAMADAS

a. Del Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República:

La omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, en el plazo establecido por el artículo Quinto Transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes y, en consecuencia, la falta de registro de la víctima de tortura o malos tratos por quien se presentó formal denuncia en el mismo.

b. De la Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos:

La omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, en el plazo establecido por el artículo Quinto Transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, en consecuencia, la falta de registro de la víctima de tortura o malos tratos por quien se presentó formal denuncia en el mismo.

c. Del Titular de la Fiscalía General de la República:

La omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, en el plazo establecido por el artículo Quinto Transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, en consecuencia, la falta de registro de la víctima de tortura o malos tratos por quien se presentó formal denuncia en el mismo”.

Respecto de lo cual, la Juez de Distrito **desechó de plano la ampliación pretendida** (motivo de la queja a que se refiere el presente asunto).

Los argumentos torales del desechamiento son:

- Se trata de actos diversos que no forman parte de la litis y no se actualizó alguna de las hipótesis para la procedencia de esa ampliación.

Determinación que este Tribunal Colegiado, estima no fue correcta.

Se afirma lo anterior, debido a que tal como se indicó en la propia resolución recurrida, la ampliación de la demanda es una figura jurídica que confiere a la parte quejosa el derecho para incorporar a la litis del juicio de amparo, autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación diversos.

Sin embargo, tal derecho debe observar requisitos de procedencia (artículo 111 de la Ley de Amparo), que son:

a) Que **no se haya cerrado o integrado la litis** (no se hayan rendido los informes justificados);

b) Que del informe justificado se adviertan datos no conocidos por la parte accionante, que el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o bien, cuando dicha parte, **por cualquier medio, tenga conocimiento de diversos actos de autoridad vinculados con los reclamados.**

c) Que lo anterior tenga vinculación con el acto originalmente reclamado en el escrito inicial de la demanda.

De lo anteriormente señalado, se aprecia de las constancias de autos, el que las autoridades responsables señaladas en el escrito original de la demanda constitucional, no todas habían rendido su informe.

Con motivo de la solicitud del propio quejoso al Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura Fiscalía General de la República (autoridad responsable señalada desde la primaria demanda de derechos), dicha autoridad emitió el oficio ***** , por el cual informó no se había realizado la inscripción de alguna posible víctima en el Registro Nacional y expuso las razones de ello.

Ahora bien, con relación al requisito último, relativo a las razones de la ampliación de demanda constitucional, tenga vinculación con el acto originalmente reclamado en el escrito primigenio de la demanda.

Se obtiene que originalmente los actos reclamados son:

- ° La dilación en la integración de la averiguación previa ***** y su consecuente determinación.
- ° La omisión de supervisar de manera diligente y efecto que el agente del Ministerio Público de la Federación investigue los delitos con la debida diligencia en la indagatoria *****.
- ° La omisión de supervisar que el Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura investigue los delitos con la debida diligencia en la que averiguación previa *****.
- ° Las omisiones en la coordinación y supervisión de la actuación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, en la que ha delegado su función investigadora.

° La dilación en la integración de la averiguación previa ***** y su consecuente determinación.

Precisado lo anterior, acorde con la naturaleza de los actos reclamados (iniciales), relativos a omisiones en la investigación con la debida diligencia los eventos de tortura denunciados y a que se refiere la multicitada averiguación previa *****.

Se obtiene que el artículo 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece:

“Artículo 35. Las Fiscalías Especiales, **además** de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que tengan conocimiento de la probable comisión del **delito de tortura**, deberán llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: I. Iniciar de manera inmediata la investigación por el delito de tortura; II. Comenzar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, incluyendo las declaraciones del denunciante o Víctima alegada del delito y los testigos; **III. Realizar el registro del hecho en el Registro Nacional;** IV. Informarán a la persona denunciante de su derecho a contar con un asesor jurídico; V. Solicitar a las autoridades competentes el resguardo del probable lugar de los hechos y solicitarán a los peritos su intervención para el procesamiento del mismo; VI. Solicitar la intervención de peritos para que realicen el dictamen médico-psicológico correspondiente y los demás que se requieran; VII. Informar a la Víctima de su derecho a ofrecer un dictamen médico-psicológico elaborado por peritos independientes o, en su caso, por organismos públicos de protección de los derechos humanos cuando se emitan con motivo de quejas interpuestas ante los mismos. VIII. Emitir las medidas de protección necesarias para resguardar la integridad de las Víctimas y testigos; LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O

actos de investigación, esto es, con motivo de tal omisión (indagatoria eficiente) tampoco se ha realizado dicho registro por parte de las autoridades ministeriales señaladas como responsables.

Por lo tanto, resulta fundado el **primero** y **segundo** de los agravios (síntesis).

No es inadvertido que cuando se reclama únicamente el registro de víctimas, se trata de un acto meramente de ejecución –administrativo-, pero en el particular no se actualiza, debido a que la omisión de tal inscripción pretendidamente reclamado, es resultado de las omisiones de investigar con la debida diligencia la averiguación previa ***** , derivada de los actos de tortura denunciados, por ende, guardan estrecha relación entre ellos.

Sustenta a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, Julio de 2003, Novena Época, de título y contenido:

“AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.

La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los normativos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo vigente, 35 y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se

RESOLVE:

ÚNICO. Se declara fundada la presente queja.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución al Juzgado ***** de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como el legajo de constancias en copias certificadas que envió, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de la Magistrada **Emma Meza Fonseca (Presidenta)**, Magistrado Ricardo Paredes Calderón y Secretario en funciones de Magistrado Daniel Guzmán Aguado **(Ponente)**.

Firman electrónicamente los Magistrados y Secretario en funciones de Magistrado que integran el Tribunal, ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.

3003003.doc

Indicadora Inte

MAN AGUADO

18:38:547 / 28/1

SA

f 27 0f e0 3f 3f 89
3 7f c9 22 28 1d

5 59 6c c8 28 73
0 00 b8 34 92 c0

9 1f c4 aa 80 7b 5
0 d7 93 a0 ff 92 b

5 03 c3 14 da 73

8 81 9e 2e ea 6a
3 c8 fc a1 1e 67 :

3 37 7e 6c ca c3
7 85 ce 75 ec 53

3 6c b0 84 2b 22
4 7f 2e a8 cb 51

8 d7 c6 b1 4c 44
23 00 2f ad 55 3

18:38:53Z / 28/1

Consejo de la Ju

53.6a.66.00.00.00



0.00.00.01.1b.7
20T12:38:54-06
-09-02 19:23:4

Firmante	Nombre:	Erika Georgina Conde Cháirez	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000000ed60	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	28/10/2020T18:38:54Z / 28/10/2020T12:38:54-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	Sha256withRSA			
	Cadena de Firma:	0f af bd 5c 95 4d 95 70 60 51 c0 ed af 8c 46 7f 65 16 41 15 7e ff f0 f4 2e 20 3e 5f 43 69 9e 1e 2d 14 6f 4e 52 7d 0d e3 99 cf d4 68 8a 92 fe 42 fa a5 e9 5f 32 a2 b8 56 46 69 57 78 36 32 1a 93 54 e5 e0 91 f2 43 46 63 64 55 c9 99 a8 8d 24 d7 6c a3 04 da 22 3b 9c 39 c9 a5 bd 6b 71 5f ba a3 d5 4c 6c 1b 39 04 3b 83 b2 d5 9d e5 7a 7f c0 bf 61 be f4 b2 07 6e d2 39 96 c3 73 16 ab 45 7f 8e 57 39 6e de c4 00 d7 ed 6b c4 e1 60 84 16 9d cf da df 45 5e 15 e5 7b c5 b4 af ca 43 13 95 3c 09 da da d0 9b e1 c2 85 91 fd 69 f6 a5 86 eb 9f 47 67 0a 69 35 a4 5d 7d 9f 8e c4 12 2f a6 39 ba b4 d7 9f 00 fe d1 87 93 dd ab a8 41 92 e1 2e 91 a3 08 6d c7 19 44 38 38 ac 6c 7a e8 a5 4b 8f c0 01 79 80 c2 81 95 f8 c7 96 2d d9 b9 3a b7 61 9c 10 84 e3 9d 94 47 de af 5a 6a 65 c8 e6 f6 c1 be 64			
OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	28/10/2020T18:38:54Z / 28/10/2020T12:38:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			

Archivo firmado por: DANIEL GUZMAN AGUADO

Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1b.76

Fecha de firma: 28/10/2020T18:38:54Z / 28/10/2020T12:38:54-06:00

Certificado vigente de: 2020-09-02 19:23:47 a: 2021-09-02 19:23:47

Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000a3ee	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	28/10/2020T18:38:54Z / 28/10/2020T12:38:54-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	Sha256withRSA			
	Cadena de Firma:	04 74 11 e4 64 f6 35 c8 c3 1b a8 d2 b0 6d 17 51 a9 74 de 12 c4 50 50 b6 f1 02 40 8e 19 37 79 e5 25 a6 02 89 c6 10 fd 93 1f 2d 47 d4 43 fa 8f f9 76 d6 18 ac bc 68 42 5d 63 c9 82 8d 0e 1f 1c a4 c2 67 a3 93 30 e5 c2 f5 eb d7 71 fc 07 d7 49 45 e2 02 87 73 94 e2 27 b6 5b db 54 33 a7 ca 37 96 b1 24 5c cf 14 cc 9c 62 60 28 2e d7 06 0c ad 92 9a 50 6c 57 62 34 03 3e 1a 26 a8 e1 13 7e c1 8b 9a 5b 38 25 62 71 4b 83 ac 7d 71 ad 6f ef 0c 00 a4 fe 0b 65 d7 25 c1 a5 5d 9a 20 46 b1 8e a0 30 d0 48 e9 bf 1b f9 3b 1f f9 3e b0 76 c2 48 fc a9 a0 60 98 84 96 55 bb 8d c1 d0 ea 8d 7f e0 8d 66 43 df 13 99 d2 7f 51 25 ab 7c 0a 62 43 70 13 92 88 c1 a6 71 7e 0f ce 09 88 97 71 c6 c8 e1 79 90 ea 61 4e 2e 7d 33 da 98 b1 f1 87 be 1e af 2b 11 d9 f4 4c 33 80 66 30 7b 12 88 de 10 29 7b ed 6e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	28/10/2020T18:38:54Z / 28/10/2020T12:38:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			

El veintiocho de octubre de dos mil veinte, la licenciada MARIA GUADALUPE JIMENEZ DUARDO, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de Obran datos personales que hace identificable a las partes.. Conste.